

# Los nuevos tiempos de la educación superior

RODRIGO ARIM

Rector de la Universidad de la República, Uruguay.

Comenzar un artículo en una revista de estas características, afirmando que nuestras sociedades y nuestras universidades viven tiempos paradójicos y cargados de incertidumbres, puede sonar a lugar común o insulsa aseveración de validez atemporal.

A final de cuentas, no debería ser llamativo que de la estabilidad y sentimiento de prosperidad general resulte un escenario excepcional, oasis circunstancial con sus propios espejismos, en una región cargada de desigualdades hirientes, con conflictos políticos y sociales estructurales o emergentes agudos, con tendencias a la conformación periódica de regímenes autocráticos, con amenazas latentes de derivas autoritarias y enormes dificultades para incorporar, más allá del discurso retórico, a los sectores más vulnerables y excluidos a un diálogo republicano capaz de superar la exclusión social y cimentar sociedades bajo criterios de justicia aceptables.

No es casual que la autonomía universitaria –valor inseparable de la idea de universidad humboldtiana de principios del siglo XIX– adquiera en América Latina y el Caribe fuerza articuladora sobresaliente, no solo como un espacio para dotar de la necesaria libertad a la creación artística, cultural y científica a los cuerpos académicos, sino también por la persistencia de amenazas perennes sobre ella y porque la defensa de la autonomía se ha erigido como símbolo de la defensa de la libertad y de la democracia, como un espacio donde las universidades se comprometen con el cambio social progresivo, como un antídoto contra el autoritarismo. Permítanme una nota casi local como ejemplo: pocos espacios de reivindicación pública tuvieron una carga de resistencia contra las dictaduras militares como lo fue en el Río de la Plata la lucha por retomar la autonomía y el autogobierno en nuestras universidades.

Hablar, pues, de incertidumbre emergente o amenazas presentes o potenciales en nuestras sociedades, no parece arrojar mucha luz sobre la especificidad de este momento histórico que vivimos. Lo nuevo es que Occidente, del que somos parte subordinada, está viviendo profundas crisis de legitimidad y no son fáciles de pronosticar los escenarios venideros. A riesgo de ser extremadamente esquemático, me interesa enfatizar tres crisis emergentes a escala global y que se transforman en nuevos factores de riesgo para nuestra región.

En primer lugar, la crisis del propio concepto de democracia. En segundo lugar, la creciente relevancia de las desigualdades sociales, origen de preocupaciones normativas y de tensiones políticas. En tercer lugar, la crisis identitaria del propio concepto de universidad, de su configuración normativa que le brinda especificidad en la constelación de instituciones que conforman los marcos políticos y sociales que habitamos. El interés por estas crisis tiene que ver con el tema que atañe a este texto: la cooperación entre universidades de la región como parte de una estrategia mucho más general capaz de transformar a nuestras universidades en actores claves de siglo XXI en la promoción del bienestar colectivo, la constitución de sociedades justas y en la reversión del deterioro medioambiental.

## Tres crisis: democracia, desigualdad y universidad

Morgan White (filósofo de educación superior) en su libro de 2017, *Towards a political of the university: public reason, democracy and higher education*, señala que la democracia como concepto siempre se encuentra en crisis, porque las políticas democráticas siempre se encuentran en discusión y no se establecen, sino a riesgo de contradicción, de una vez y para siempre. Sin embargo, aunque en permanente cambio, hay elementos sólidos para afirmar que la ciudadanía ordinaria ha perdido control de las políticas.

White señala dos factores importantes para entender “la crisis de la democracia occidental”. En primer lugar, que es posible que hayamos perdido la imaginación política para delinear futuros alternativos, que puedan alimentar el optimismo de la voluntad actuando junto al pesimismo de la racionalidad. Siguiendo a Habermas: el agotamiento de las grandes utopías no fue sustituido por el cultivo de una imaginación política colectiva.

El presente parece ser el único futuro posible y las diferencias en las propuestas de política que se ubican fuera del sueño conservador de las derechas (en sus vertientes más o menos autoritarias) son difíciles de percibir. Autores tan diversos como el filósofo de Harvard, Michael Sandel o el economista que ha trabajado sobre la desigualdad Thomas Piketty identifican en esta mimetización un problema para la democracia. Entre la socialdemocracia europea –que erigió buena parte del estado de bienestar de la posguerra– y la centro derecha no emergen diferencias sustantivas ni en las políticas ni en los juicios normativos. Volveré sobre estos tópicos, y su vínculo con la vida universitaria más adelante.

La democracia no solo parece no despertar entusiasmo, en particular entre las cohortes más jóvenes, sino que no brinda respuesta a los problemas de bienestar y de desigualdad. La desilusión sobre el funcionamiento institucional puede ser fuente de frustración, pero también de conflicto social. En América Latina no es un problema de siglo XXI, pero atender la necesidad de más equidad y más acceso a distintas trayectorias de vida sigue siendo acuciante. La ausencia de creatividad política y la mimetización –muchas veces tecnocrática– del espectro político en alternativas no diferenciables son factores que explican la ausencia de salud de buena parte de nuestras democracias.

La democracia también se ha polarizado. Las sociedades parecen partidas en bandos que no dialogan ni esbozan tampoco argumentos reflexivos o luchas articuladas a partir de objetivos claros. La estigmatización y el agravio sustituyen la argumentación solvente de posiciones diferentes, incluso irreconciliables. Pero la ausencia de proyectos sobre el futuro es llenada por la confrontación táctica, vacía de contenidos. Por la sustitución shumpeteriana de las elites en el poder, pero sin cambios observables en el arreglo de políticas.

En segundo lugar, es frecuente asociar la crisis de la democracia a la idea de que las instituciones políticas muestran escaso poder de adaptación a los cambios sociales y culturales. White señala, con razón, que esta interpretación ignora el hecho de que nuestras propias instituciones -en particular las universidades- se han transformado en instituciones que operan con lógicas, en muchos casos, privadas, perdiendo parte de su capacidad democrática y de sostén de bienes y esferas públicas. Esto nos permite avanzar sobre el segundo problema conceptual: la idea de universidad también puede estar en crisis.

Las universidades han estado sometidas y han adherido, sin demasiada reflexión explícita, a nuevas modalidades de funcionamientos, fuertemente asociadas a los paradigmas neoliberales pero que no se agotan en ellos. Espacios de reflexión y argumentación; los sistemas universitarios se han fragmentado y mercantilizado. El financiamiento público se debilita, las instituciones estatales son puestas a competir en pie de igualdad con instituciones privadas, incluso con fines de lucro, por recursos públicos. El prestigio se asocia a *rankings* que premian ciertos logros sobre otros y en muchos países la carga del financiamiento recae sobre los estudiantes. Un pacto social, que veía a las universidades como parte del estado de bienestar, se ha debilitado. Más aún: la propia naturaleza de las universidades cambia, ante el incentivo de premiar las actividades generadoras de ingreso. El mercado sustituye al estado, a la sociedad civil en un sentido amplio, y a las propias comunidades universitarias como estructuradoras de incentivos y prioridades de las universidades.

Estos cambios no son solo efecto de un agente externo, también se asocian a debilidades de nuestras universidades, a comportamientos corporativos, a incapacidad para proyectar cambios. A cierto elogio de la permanencia y la invariabilidad. A una liturgia conservadora, que se aplaude a sí misma y se niega a ver debilidades. El mercado debilita los bienes públicos provistos por la educación superior, pero las instituciones universitarias han tenido dificultades para asumir posturas críticas y propositivas, para erigir alternativas a los arreglos de mercado. Lo cierto es que la competencia entre las universidades se instala como patrón y que esa competencia ya tiene rasgos globales. Las universidades de América Latina y el Caribe,



desde nuestra diversidad, nos debemos una reflexión crítica, el diseño de alternativas y la búsqueda de otros horizontes.

Estas tendencias suceden en el marco de otras crisis: la desigualdad estructural sigue siendo un rasgo hiriente de la región y ahora es fuente de preocupación y conflicto en el mundo occidental en general.

¿Cómo dialogan problemas de funcionamiento democrático, combate a la desigualdad y el mundo universitario?

## Bienestar, desigualdad, democracia: generación y democratización del conocimiento avanzado

Hay otras paradojas en este mundo donde la reflexión política pierde profundidad y se banaliza. Desde el *mainstream* político, la respuesta al incremento de la desigualdad es la apelación a la meritocracia. No es este lugar para entrar en un análisis crítico de la meritocracia como marco articulador de las políticas, pero sí señalar las consecuencias y contradicciones que su preponderancia genera sobre las universidades.

“Igualemos el campo de juego aseguremos a todos las mismas oportunidades”, rezan las consignas meritocráticas. En esa apelación, la educación parece ser el único activo disponible para avanzar en esta dirección. Poco se discute y menos se actúa sobre los sistemas tributarios o sobre la redistribución de otros activos, incluyendo los recursos naturales. La educación parece ser la respuesta a todo y, en particular, la educación superior es el canal privilegiado en el discurso y en las esperanzas de los jóvenes y sus familias.

Por supuesto, el acceso y permanencia en la educación superior importa en sí: abre oportunidades a trayectorias vitales diferentes, incrementa el acervo cultural y la agencia de los estudiantes. Pero no asegura mayores niveles de igualdad. El aumento del nivel educativo promedio de la población es una tendencia secular desde hace, por lo menos, 200 años, y ha convivido con periodos de incremento y caída de la desigualdad, por ejemplo, en la distribución del ingreso. Miremos los últimos años: la gestión de empresas tecnológicas (TBM, por sus siglas en inglés) terciaria creció en todos los países de la región, pero su variación no muestra correlación con los movimientos en la desigualdad del ingreso.

En buena medida, la ausencia de grandes utopías –políticas, pero también de pertenencia a comunidades de otra naturaleza–, ha hecho que todas las esperanzas de movilidad y realización de los sectores socialmente más postergados se ubiquen en la educación superior.

En parte, el problema es que la educación superior se ha expandido en estratos diferenciados, con los sectores más vulnerables accediendo a las instituciones de menor calidad y prestigio, y los sectores más pudientes a las instituciones de mayor nivel, muchas veces públicas. Los mecanismos de selección y los diseños curriculares reproducen a escalas increíbles las desigualdades de origen. Las universidades poco hemos dicho sobre este problema en América Latina; aunque es fuente de clara preocupación en la producción académica fuera y dentro de la región. Sandel lo advierte desde Estados Unidos, pero su advertencia es válida para nosotros:

Alguna vez vista como un motor de oportunidades, la Universidad se ha convertido, al menos para algunos, en un símbolo de privilegio credencialista y arrogancia meritocrática. [...] la educación superior en la era de la meritocracia no ha sido un motor de movilidad social; por el contrario, ha reforzado las ventajas que los padres privilegiados confieren a sus hijos (Sandel 2020).

Cuando más universitarias y universitarios hay según generación, las universidades pueden no solo frustrar las expectativas de movilidad y de pertenecer a sociedades justas, que distribuyan las opciones de vida acorde a visiones equitativas. Pueden ser un músculo de reproducción de las desigualdades. Poco énfasis hemos puesto en estas disyuntivas; entre otras cosas porque ubica algunas discusiones pertinentes –como la de la propia autonomía universitaria– en una nueva perspectiva. Porque cuestiona el espacio que ocupamos las universidades, en particular las más longevas, y nuestra responsabilidad en contener a las nuevas generaciones de estudiantes.

La autonomía institucional singular, individual de una universidad debe dialogar con la presencia de verdaderos sistemas de educación terciaria y superior. Son imprescindibles los espacios de coordinación, si se acepta el desafío que la diversidad institucional no puede transformarse en estratificación institucional y, a través de ese mecanismo, en reproductora de desigualdades. En 1918 la autonomía se expresaba en la universidad. En épocas de ampliación de las plataformas institucionales, la autonomía debe ser una autonomía coordinada y colaborativa entre instituciones de educación superior que integren un verdadero sistema.

Las universidades no solo somos espacios de formación - profesional, académica, técnica- nos definimos por la búsqueda del conocimiento avanzado, por la investigación en todas las ramas de la ciencia y la cultura. América Latina y el Caribe tienen un retraso relevante en la profesionalización de la investigación y en la demarcación de criterios de pertinencia, que empujen la investigación endógena y no subordinada.

Sin embargo, la inversión pública en esta materia también es paupérrima, justo cuando la aceleración de la investigación científica exige más y costosos equipos e infraestructura y la promoción de la inserción en redes internacionales de calidad de forma activa. ¿Podemos, las universidades, solas, afrontar este desafío sin correr el riesgo de continuar perdiendo espacio en el concierto internacional?

Thomas Piketty, en *Capital e ideología* (2019), señala otra paradoja: en tiempos en que se habla de la economía del conocimiento, de la importancia de la innovación y que se observa un crecimiento sostenido de la proporción de jóvenes que acceden a la educación superior, la inversión pública en educación superior y universidad, a escala global, se ha estancado con respecto a otras erogaciones del Estado.

Las inestabilidades institucionales y la miopía estatal en la mayor parte de los países hacen que no resulte razonable una actitud pasiva, que solo reclame recursos a los estados –que hay que hacerlo– para sostener la democratización del conocimiento y el desarrollo de una investigación de calidad y conectada. La agenda que sitúa el compartir nuestras fortalezas para avanzar sobre nuestras debilidades debe ocupar un espacio medular.



Cooperación más que competencia, construir plataformas regionales con recursos frugales, pero que sostengan la cooperación académica en la formación de grado y posgrado, así como programas de investigación que trasciendan a una institución. Conectados en red, construyendo con generosidad los recursos universitarios, será posible avanzar en esta dirección.

Ni la generalización de la educación superior de calidad o el avance en la investigación y creación cultural a mayor ritmo pueden suceder sin esquemas colaborativos y en redes. Las universidades –que no *think tank*, ni representaciones derivadas– debemos promover esos acuerdos. En parte, presupone que estos espacios como la Unión

de Universidades de América Latina y el Caribe u otras redes hermanas, nos preocupemos más por la construcción de proyectos conjuntos que por la participación en foros internacionales con declaraciones acartonadas y, muchas veces, reiterativas. Es tiempo de proponer desde la cooperación.

Pero tampoco habrá estabilidad democrática ni espacios de democracias deliberativas sanas sin políticas capaces de atender las grandes desigualdades sociales. Las universidades debemos colaborar en erigir sociedades más justas, vía el acceso equitativo al principal recurso productivo, social y cultural del siglo XXI: la educación superior y el disfrute del conocimiento avanzado.

Pero hay, también, otro papel que jugar: somos la arena institucional que pretende preservar, aunque no siempre lo logra, la argumentación reflexiva y el diálogo deliberativo como parte de su *ethos*; la institución que cultiva diferencias en enfoques y perspectivas, que no clausura debates. Una universidad más democrática en su acceso, más diversa, es también un mecanismo de promoción del respeto recíproco y el debate informado.

En tiempos de generalización de *fake news* y la crispación personal, promover el debate informado de ideas es un aporte a la institucionalidad democrática. En tiempos de inestabilidades regionales y de cambios bruscos de actores políticos, a veces con tintes autoritarios, la búsqueda de encuentros universitarios y la construcción de redes más sólidas entre nosotros es un pequeño aporte en esa dirección. Eso necesita repensar cánones de funcionamiento y agendas políticas. Más universidades autónomas de calidad, diversas, en redes densas y estables no sería un aporte despreciable en tiempos de verdades absolutas, debates truncados y crispaciones vacías de contenidos conceptuales. Voluptat aquist, aut eostint ratquidionse perum is si repelia non pliquas nulprior sintent moditi cones et volupta spellam aut aut magnimusae ea vellatisitas enest hitibus volupta conesto rporpos rentisit qui qui sincidu ciderorro is et quis volorem quos apedist emporion cum ex est, quiam rem incipsam qui ullaccaest, quias ex erro iust unt aut vero doluptatium sa et omnis vidiorit ut hillistotat moloria velecabor sim reume quatenis plitatu santia doluptis excerum quiassin nem exceputa